



El sobornador quería que el concejal no pusiera pegas a que su empresa hiciera la pista de atletismo.

él a todos los que estuvieran implicados en el «affaire».

La operación de caza

Con las autoridades policiales y judiciales enteradas del tema, se procedió al montaje de la operación que concluirá con la «caza» del sobornador. Para ello, el juez ordenó la intervención del teléfono particular de **Andrés Congregado**, primero, y posteriormente, cuando ya se concertó la cita en **Madrid** entre éste y el presunto representante de OPSA, dos policías le acompañaron a la capital de España para supervisar y llevar a cabo la que debía ser penúltima fase de la operación. Lógicamente, **Andrés Congregado** no sólo

colaboró sino que participó activamente en la misma, puesto que él es el primer interesado en descubrir la trama. Y así, el pasado día 11 de mayo el concejal talaverano acudió a la cita que previamente había concertado en la cafetería May, en la calle Doctor Esquerdo, provisto de un maletín especial que le proporcionó la Policía y que mediante un mecanismo de fácil manejo grabó la conversación que aquél y su sobornador mantuvieron.

Mientras los dos policías de la Comisaría talaverana merodeaban por los alrededores de la cafetería, **Andrés Congregado** y **Mario Sánchez** hablaron sobre el dinero y las condiciones que aquél debía percibir y respetar, respectivamente, por su aportación al «negocio».

Congregado tiró de la lengua cuanto pudo a su interlocutor, para que sus palabras quedaran grabadas en la cinta

Una persona que dijo representar a la empresa OPSA le ofreció 1.800.000 pesetas «por no poner pegas» a una adjudicación que importaba 60 millones.

ta magnetofónica de que estaba provisto su maletín de mano y, aunque la conversación no ha podido ser cono-

cida en su integridad por esta revista —ya que la cinta ha quedado a disposición judicial— **BISAGRA** ha podido saber que en el transcurso de la misma **Mario** ofreció 1.200.000 pesetas al concejal talaverano «por no poner pegas a la adjudicación» que la Diputación Provincial de **Toledo** iba a hacer a OPSA para la construcción de la mencionada pista de atletismo, cuyo presupuesto oscila en torno a los 60 millones. Se da la curiosa circunstancia de que en principio el presunto representante de OPSA le ofreció el 3 por 100 del presupuesto total —es decir, 1.800.000 pesetas—, pero finalmente rebajó la cantidad a la señalada porque, al parecer, tenía otros «gastos» que satisfacer.

Como la intervención del